

REVISTA DE DERECHO

AÑO XXVII — OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1959 — N.º 110

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

CONSEJO CONSULTIVO:

HUMBERTO ENRIQUEZ FRODDEN

ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA

JUAN BIANCHI BIANCHI

QUINTILIANO MONSALVE JARA

MARIO CERDA MEDINA

ESTEBAN ITURRA PACHECO

★

★

★

ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA — CONCEPCION (CHILE)

CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCION

**DEPARTAMENTO DE INDEMNIZACIONES A
OBREROS MOLINEROS Y PANIFICADORES
CON CARLOS SCHROEDER MOLL**

JUICIO EJECUTIVO

Apelación de la sentencia definitiva.

**OBREROS — OBREROS MOLINEROS — OBREROS PANIFICADORES —
INDEMNIZACION — INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS —
INDUSTRIA — INDUSTRIA MOLINERA — INDUSTRIA PANADERA —
INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA — MOLIENDA — PAN — ELA-
BORACION DEL PAN — COSTOS DE MOLIENDA Y ELABORACION DEL
PAN — RECARGO LEGAL — JORNALES — CONFLICTOS DEL TRABAJO
— ARBITRAJE — FALLOS ARBITRALES — AVENIMIENTOS — ACTAS DE
AVENIMIENTO — DECRETO SUPREMO N.º 756 DE 1952 — RECARGO DEL
PRECIO DEL PAN — CONSUMIDOR — IMPUESTO — CONTRIBUCION.**

DOCTRINA.—Son numerosas las normas legales dictadas en nuestro país y contenidas en Leyes, Decretos Supremos y Decretos con Fuerza de Ley, que han dejado claramente establecido —sin que sea necesario referirse a la finalidad social que en ellos se persigue— el otorgamiento, a los obreros molineros primero y a los panificadores en seguida, de la correspondiente indemnización por años de servicios en la industria respectiva; y para el financiamiento del pago de ella se ha dispuesto que el Instituto

de Economía Agrícola debe contemplar en los costos de molienda y de la elaboración del pan, un rubro que es del 8,33% de los jornales pagados por las industrias respectivas y un rubro especial que debe acumularse y destinarse a la cancelación de beneficios concedidos a tales obreros por los años servidos con anterioridad al primero de Enero de 1947, y otro relativo a los gastos de administración de dichos fondos.

Si bien es cierto que los primeros Decretos dictados sobre

esta materia tuvieron un alcance limitado, ya que se concedió tal indemnización a los obreros molineros primero, y en seguida a algunos obreros panificadores solamente, no lo es menos que el Decreto Supremo N.º 756, de 13 de Octubre de 1952, hizo extensivo este beneficio a todos los obreros panificadores e impuso a todos los industriales del país, hubiesen o no solucionado sus conflictos mediante fallos arbitrales o actas de avenimiento, la obligación de ingresar mensualmente y dentro del mes, en la respectiva Tesorería, el valor íntegro de los rubros antes mencionados y que correspondieran al mes anterior.

Es, por lo tanto, de toda evidencia, la obligación que pesa sobre los industriales en cuanto a depositar mensualmente y en la forma ordenada en el Decreto Supremo antes mencionado, los fondos por ellos recaudados y que se han obtenido mediante el recargo en los costos de la molienda del trigo y de la elaboración del pan, y que soporta el público consumidor.

La obligación impuesta a los industriales panificadores por el Decreto Supremo N.º 756, antes citado, no constituye ni puede ser considerado como un impuesto o contribución, ya que los fondos que esos industriales tienen que

depositar han sido obtenidos por ellos al cobrar el valor del pan, con su mayor precio, recargo que ha pagado el público consumidor y que, consiguientemente, dichos industriales no han tenido que soportar.

Sentencia de Primera Instancia

Talcahuano, diecisiete de Diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

Vistos:

Don Luis Herrera Reyes, abogado, de este domicilio, Pasaje Maritano 39, en representación del Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores, deduce demanda ejecutiva en contra de don Carlos Schroer Moll, por adeudarle la suma de \$ 567.972, correspondientes al no pago de los rubros de indemnización por años de servicios a los obreros panificadores que trabajan en su industria, por el período comprendido entre el 14 de Diciembre de 1951 al 4 de Marzo de 1957, ambas fechas inclusive y a que se refiere la nómina de fojas 3. Agrega que se trata de una obligación líquida, actualmente exigible y no

JUICIO EJECUTIVO

519

prescrita y contenida en un título ejecutivo. Cita las Leyes 12.444, 10.225, el N.º 7 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, los Decretos Supremos 931 de 1947, 784 de 1951 y 756 de 1952 y los Decretos con Fuerza de Ley 87 y 117 de 1953.

Se ordenó despachar mandamiento de ejecución y embargo y, requerido de pago el ejecutado, se opuso en escrito que rola a fojas 7, en cuyo primer otrosí hace valer la excepción de inexistencia de la obligación que le otorga el inciso cuarto del artículo transitorio de la Ley 12.444, puesto que no está obligado en los términos del artículo 1437 del Código Civil con la entidad ejecutante, sea con contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito o Ley, que pongan de su cargo el pago de la indemnización que se cobra. El pago de tal beneficio, agrega, quedó supeditado a la dictación de una ley que aún no se dicta y lo que se cobra es un impuesto que no pudo establecerse por un simple decreto, sino por una ley, de conformidad con los preceptos que rigen tal materia. Subsidiariamente, opone la excepción de prescripción de la acción ejecutiva con respecto a toda obligación que se haya devengado con anterioridad al 14 de Julio de 1953.

Conferido traslado de las ex-

cepciones, la ejecutante expresa que los decretos supremos que primitivamente establecieron la indemnización por años de servicio han cobrado vida legal con el reconocimiento que de ellos han hecho los decretos con fuerza de ley y leyes posteriores.

Declaradas admisibles las excepciones opuestas, se recibió la causa a prueba, rindiendo la actora la documental de fojas 30 y 34.

Las partes han presentado escritos de observaciones a la prueba rendida y en apoyo de sus alegaciones.

No se citó a las partes para oír sentencia por no ser procedente en esta clase de juicios y se han traído los autos para resolver.

Considerando:

1.º—Que procede determinar si el ejecutado don Carlos Schroer Moll está obligado a pagar al Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores la suma de \$ 567.972 por concepto de indemnización por años de servicio por el periodo comprendido entre el 14 de Diciembre de 1951 al 4 de Marzo de 1957 y, para el caso de rechazarse la excepción de inexistencia de tal obligación, si la acción ejecutiva deducida se encuentra prescrita;

2.º) Que si bien la oposición del ejecutado sólo puede ser admisible cuando se funda en alguna de las excepciones señaladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, la circunstancia de que el inciso cuarto del artículo transitorio de la Ley 12.444 faculta al interesado para oponer la excepción de inexistencia de la obligación importa el deber de analizarla, sea que se la estime como una excepción diferente a las señaladas en el Código citado, sea que se la comprenda en el N.º 7.º del indicado artículo 464;

3.º) Que con respecto a la excepción de inexistencia de la obligación, la discusión versa sobre si la indemnización cobrada se contiene en una norma con eficacia de ley y si ella importa el establecimiento de un impuesto;

4.º) Que basta para no considerar impuesto el beneficio que se cobra, el hecho de que no sea una prestación coactiva para atender las necesidades públicas del Estado;

5.º) Que si bien los Decretos con Fuerza de Ley números 87 y 117 de 1953 se refieren al Decreto 931 de 1947 que estableció la indemnización por años de servi-

cios a los obreros molineros y panificadores, es sólo para decir, el primero, que las atribuciones y recursos de tal decreto pasarían provisoriamente al Servicio de Seguro Social y, el segundo, para crear una persona jurídica con patrimonio propio, denominada Departamento de Indemnización de Obreros Molineros y Panificadores al que corresponderá la administración de dichos bienes y recursos;

6.º) Que los referidos Decretos con Fuerza de Ley números 87 y 117 no alteraron en absoluto el contenido del decreto 931 de 1947 y, por el contrario, en la exposición de motivos de la dictación del segundo, se expresa que él tiende a "obtener una administración directa y autónoma de los fondos recaudados" y que se dicta a petición de los industriales y obreros que "solicitan una administración autónoma de los fondos recaudados";

7.º) Que tales decretos con fuerza de ley fueron dictados de acuerdo con la facultad que al Presidente de la República le otorgó la Ley 11.551, pero en el artículo 115 de esta ley sólo se le autorizó para que en el futuro "coordinar las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes

JUICIO EJECUTIVO

521

que lo complementan o adicionan y las relativas a la previsión social", sin que pudiera "aumentar ni disminuir los beneficios o derechos que las leyes actualmente otorgan a empleados y obreros", y no para que diera fuerza de ley a disposiciones anteriores;

8.º) Que si bien por el inciso tercero del referido artículo 115 de la Ley 11.151 pudo el Presidente de la República "otorgar a los obreros ... la indemnización por años de servicios", lo que hizo por Decreto con Fuerza de Ley de 23 de Julio de 1953 N.º 243, su creación se hizo para el futuro y sin que en ninguna de sus partes se refiriera, lo que no podía hacer, a otorgarle valor de ley al referido Decreto 931;

9.º) Que lo dicho no se opone a la reserva obtenida en el artículo 2.º transitorio de este Decreto con Fuerza de Ley 243, que expresa que las indemnizaciones por años de servicios vigentes y más beneficiosas, contenidas en Decretos Supremos subsistirán, por cuanto la implícita referencia al Decreto Supremo especial 931 de 1947, por sí sola no da a este texto reglamentario la calidad de ley, que no estaba en manos del Presidente de la República otorgarlo, atento a las facultades res-

tringidas y precisas que le otorgó la Ley N.º 11.151 y por el hecho de que numerosos industriales, aún sin convenio, se allanaron a cumplir con el contenido del decreto 931;

10.º) Que la referencia del Decreto 931 hecha por la Ley 12.444 no puede tener el alcance que el ejecutante le otorga, de reconocimiento legal, tanto porque las referencias tienen el alcance limitado de señalar quienes recaudarán y percibirán los fondos establecidos con anterioridad y de otorgar mérito ejecutivo a las nóminas que presentan los encargados de recaudarlos y percibirlos, cuanto porque no puede ser misión de la ley dar este carácter a decretos supremos anteriores;

11.º) Que reafirma la idea de que la Ley 12.444 no otorgó al Decreto 931 más fuerza que la que originariamente tenía, el hecho de que en el inciso 4.º de su artículo transitorio, facultara al interesado por oponer la excepción de inexistencia de la obligación;

12.º) Que sin embargo de lo considerado precedentemente, en orden a que el Decreto 931 no es una norma con obligatoriedad de ley, procede examinar si de su

contexto resultan obligaciones para el ejecutado;

13.º) Que el dicho Decreto N.º 931 de 25 de Octubre de 1946 se aplicó originalmente sólo a los obreros molineros como se dice en la exposición de motivos del decreto, y a los obreros que trabajan en industrias anexas a los molinos y que pertenecen a un sindicato de Obreros Molineros —artículo 20 del decreto— y afecta a la industria molinera, calidad que no inviste la ejecutada a quien la actora individualiza en su demanda de fojas 4 como "propietario de la panadería Alemana" y que, agrega, adeudaría "la indemnización por años de servicios de los obreros panificadores que trabajan en su industria";

14.º) Que el mismo Decreto 931 se dictó en base a un convenio suscrito el "31 de Agosto de 1946 por los obreros de los molinos afiliados a la Asociación de Molineros del Centro, en virtud del acta suscrita ante los Ministros del Trabajo y de Agricultura por la indicada Institución y los representantes de la Confederación de Sindicatos de Obreros Molineros de Chile" —párrafo 4.º de la exposición de motivos del Decreto 931— calidad que no in-

viste la ejecutada, según se dijo en el considerando anterior;

15.º) Que conviene destacar que este beneficio de la indemnización por años de servicio, contenido en el Decreto 931, fue otorgado posteriormente a los obreros panificadores de Santiago por Decreto 268 de 21 de Febrero y a los de O'Higgins, Colchagua y Ñuble, por Decreto 476 de 26 de Agosto, ambos de 1947, reconociendo estos decretos como fundamento del beneficio, un acta de avenimiento; y que, según el segundo decreto referido, este beneficio se otorgaría a los demás obreros de la panificación que lo obtengan en el futuro, en actas de avenimiento;

16.º) Que el Decreto 784 de 7 de Septiembre de 1951, no es aplicable en la especie, pues, como dice su exposición de motivos, reconoce como origen un acta de avenimiento o impone la obligación de los industriales panificadores de depositar los fondos de indemnización respecto de las localidades en que está establecida la indemnización, lo que, como se dijo, en los fundamentos 13 a 15 de esta sentencia, no regía en este departamento ni en la provincia de Concepción;

JUICIO EJECUTIVO

523

17.º) Que el Decreto 756 de 5 de Septiembre de 1959, que reemplazó el artículo 2.º del Decreto 268 de 14 de Marzo de 1952, que a su vez complementó el Decreto 931 de 25 de Octubre de 1946, hizo obligatorio para todos los industriales del país, hubieran o no solucionado sus contratos mediante fallos arbitrales o actas de avenimiento, el ingreso del valor íntegro de un rubro especial equivalente al 150% del rubro "jornales";

18.º) Que tal obligación establecida en el Decreto 756 no afecta, sin embargo, al ejecutado, por cuanto su fundamento, según el artículo primero del Decreto 288, está en el acta de avenimiento del 31 de Agosto de 1946 en la que, como se dijo en el considerando 14.º, no fue parte el demandado;

19.º) Que corrobora la conclusión precedente el hecho de que el Decreto 756 fue dictado, como se dice en sus fundamentos, a petición de las partes en él señaladas y por acuerdo suscrito entre ellas y se fundamenta, sin embargo, como también se dice en la motivación del decreto, en las facultades que al Presidente de la República le otorga el N.º 2.º del artículo 72 de la Constitución Política del Estado;

20.º) Que, en efecto, el Decreto 756 no emana de dicha facultad constitucional, ya que no se dictó para la ejecución de una ley, sino en cumplimiento de un acuerdo privado de los interesados;

21.º) Que el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Decreto 931, según su artículo 7.º tiene como sanción las señaladas en el artículo 16 de la Ley 4912, entre las cuales no se encuentra el cobro copulativo de los créditos;

22.º) Que los documentos acompañados a fojas 30 que dicen relación con la aprobación de un nuevo costo de panificación y de precio del pan y de la harina —que no se señalan— a regir desde el 15 de Diciembre de 1951, y el de fojas 54 vuelta que señala algunos antecedentes sobre la vigencia de los rubros para indemnización por años de servicios en la provincia de Concepción, no altera las precedentes conclusiones. No se consideran los documentos de fojas 32 y 36, a petición del actor, según el segundo otrosí de fojas 45;

23.º) Que no procede pronunciarse sobre la excepción de prescripción, por haberse opuesto pa-

ra el caso que se denegara la de inexistencia de la obligación.

Por estas consideraciones, y de conformidad además con lo prevenido en los artículos 1698 del Código Civil y 144, 160, 170 y 471 del de Procedimiento Civil, se declara:

1.º—Que se acoge la excepción de inexistencia de la obligación y, en consecuencia, rechazándose la demanda ejecutiva, se absuelve al ejecutado, con costas en que se condena al ejecutante; y

2.º— Que no se pronuncia el Tribunal sobre la excepción de prescripción, por haberse opuesto subsidiariamente a la de inexistencia.

Anótese y complétese el impuesto.

Amelia Stevens S.

Dictada por doña Amelia Stevens Santander, Juez titular. — Tarcisio Oviedo, Secretario.

Sentencia de Segunda Instancia

Concepción, dos de Octubre de mil novecientos cincuenta y nueve.

Vistos:

Se reproduce sólo la parte expositiva de la sentencia en alzada, y se tiene presente:

1.º—Que el demandado don Carlos Schroer Moll se ha opuesto a la ejecución seguida en su contra por el Departamento de Indemnización a Obreros Molineros y Panificadores, deduciendo la excepción de inexistencia de la obligación en el carácter de principal, y como subsidiaria la de prescripción de la misma, ambas excepciones contempladas en el artículo transitorio de la Ley N.º 12.444 de 4 de Marzo de 1957;

2.º—Que fundamentando la primera de las excepciones recordadas, se sostiene que de su parte no se ha realizado acto o hecho alguno que produzca la obligación suya de indemnizar años de servicios a los obreros que laboran en su industria de panadería, y que en las actas o convenios celebrados entre patrones y obreros, siempre se ha dejado establecido que el pago de tal beneficio quedará supeditado a la dictación de una ley que lo contemple, ley que hasta el presente no se ha dictado. Que en esta situación la obligación que se le cobra

JUICIO EJECUTIVO

525

no tiene su origen o fuente ni en un contrato ni en un cuasicontrato, delito o cuasidelito ni en la ley, por manera que no pesa sobre él la obligación de indemnizar a sus obreros por los años de servicios, y que la Ley 12.444 sólo atribuyó mérito ejecutivo a las nóminas de deudores morosos, pero no estableció obligación de ninguna naturaleza a la indemnización. Agrega, que los Decretos mencionados por la parte ejecutante, se refieren a la indemnización en favor de los obreros, pero siempre que exista un acta de avenimiento, un contrato o un laudo arbitral, y él no ha concurrido a ninguno de estos actos que pudieran obligarlo, y que si bien el Decreto N.º 756 de 13 de Octubre de 1952 estableció la obligación para todos los industriales de ingresar a las Tesorerías Comunes respectivas, mensualmente el valor de los rubros correspondientes, él está creando un impuesto de indemnización a cargo de los industriales, lo que sólo se puede hacer en virtud de una ley, en mérito de lo que disponen los artículos 10 N.º 9 y 44 N.º 10 de la Constitución Política del Estado;

3.º) Que para determinar si efectivamente al ejecutado no le afecta obligación alguna de in-

demnizar a sus obreros por años de servicios, en razón de no haberse comprometido a ello por un acto o hecho suyo o por no existir normas legales que le impongan esa obligación, se hace necesario examinar las disposiciones legales contenidas en Decretos y leyes que sobre el particular se hayan dictado, y al efecto debe tenerse presente que existen las siguientes:

a) Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo N.º 931 publicado en el "Diario Oficial" de 17 de Enero de 1947, por el que se aprueba el reglamento para la indemnización por años de servicios a los obreros Molineros, en cuyo artículo 1.º se establece que "para financiar el pago de la indemnización por años de servicios, acordada por acta de avenimiento de treinta y uno de Agosto de mil novecientos cuarenta y seis y la que posteriormente se otorgue mediante contrato, avenimiento o fallo arbitral a los obreros molineros, el Instituto de Economía Agrícola contemplará en los costos de elaboración de molienda de trigo un 8,33% sobre los jornales pagados por la industria, y un rubro especial para la cancelación de la indemnización por los años de servicios con anterioridad al primero de Enero de mil

novecientos cuarenta y siete; y en los artículos siguientes, dispone que el Instituto de Economía Agrícola será el encargado de percibir dicho aporte, a fin de formar el fondo común para el pago de la indemnización y la forma como debe ser integrado;

b) Decreto Supremo N.º 263 del Ministerio del Trabajo de 6 de Abril de 1948, que agregó al artículo 5.º del Decreto antes mencionado un inciso, por el cual se obliga a los industriales panificadores a enviar mes a mes al Instituto de Economía Agrícola, una copia fiel de las planillas de los jornales pagados con respecto al estado del amasijo y de los obreros ocupados en el mes;

c) Decreto Supremo N.º 931 de 5 de Octubre de 1948 del mismo Ministerio, según el cual las imposiciones del 8,33% sobre los salarios que los industriales panificadores deben efectuar para el pago de la indemnización referida a los obreros de los respectivos establecimientos se liquidarán y pagarán en la forma que ahí se indica, y dispone, además, que el monto de la indemnización es el 8,33% sobre los salarios pagados por los industriales; 0,80 por quintal de harina panificada es para financiar los servicios anteriores al año 1947 y 0,20 por

quintal para el mantenimiento de los servicios de administración de dichos fondos;

d) Decreto N.º 181 del Ministerio del Trabajo de 8 de Febrero de 1949 que hace aplicable el Decreto N.º 931 de 25 de Octubre de 1946 para la indemnización por años de servicio a los obreros de la panificación de las provincias de O'Higgins, Colchagua y Ñuble, y a los demás que obtengan en el futuro dichas indemnizaciones sea por actas de avenimiento o por fallos arbitrales, la que regirá desde el momento en que el Instituto de Economía Agrícola contemple en los costos de panificación los rubros correspondientes al financiamiento de ese beneficio;

e) Decreto Supremo N.º 784 de 20 de Octubre de 1951 que modifica el Decreto 931 de 17 de Enero de 1947 por el que se dispone que en todo caso en las localidades en que esté establecida la indemnización, desde la fecha en que se consulten en los costos de panificación, los rubros correspondientes para la indemnización por años de servicio, será obligación de los industriales panificadores, hacer los depósitos de los fondos en el Instituto de Economía Agrícola;

JUICIO EJECUTIVO

527

f) Decreto N.º 288 de 14 de Marzo de 1952 del Ministerio del Trabajo, el que en su artículo primero establece: "que para financiar el pago de la indemnización por años de servicios a los obreros molineros acordada por el acta de avenimiento de treinta y uno de Agosto de mil novecientos cuarenta y seis, el Instituto de Economía Agrícola contemplará en los costos de la molienda del trigo un rubro especial equivalente al 15% del rubro de jornales y en el artículo 2.º del Decreto N.º 288 se lee "Establecido en los costos de molienda y panificación los rubros correspondientes a que se refiere el artículo anterior, será obligatorio para todos los industriales del país, hayan o no solucionado sus conflictos mediante fallos arbitrales o actas de avenimiento, ingresar mensualmente y dentro del mes, en la Tesorería Comunal respectiva el valor íntegro de dichos rubros, correspondientes al mes anterior, lo que harán de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.º del citado Decreto";

g) Decreto con Fuerza de Ley N.º 87 de 1.º de Junio de 1953 que fusiona el Instituto de Economía Agrícola y el Instituto de Comercio en una Empresa Comercial Autónoma que se denominará

Instituto de Comercio, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que corresponderán las facultades del Instituto de Economía Agrícola con las excepciones que se señalan en el artículo 1.º transitorio de la misma ley, entre ellas, las atribuciones y recursos del Decreto N.º 931 de 17 de Enero de 1947 con sus modificaciones posteriores, sobre indemnización a obreros molineros y panificadores, que pasarán provisoriamente al Servicio de Seguro Social;

h) Decreto con Fuerza de Ley N.º 117 de 11 de Junio de 1953, que creó una persona jurídica con patrimonio propio que se denominó Departamento de Indemnización a Obreros Molineros y Panificadores, al que se entrega la administración de los bienes y recursos que según el Decreto con Fuerza de Ley citado anteriormente habían pasado provisoriamente al Servicio de Seguro Social, y estableció que la recaudación de los fondos provenientes de la aplicación del Decreto N.º 931 tantas veces mencionado y su percepción, se hará por intermedio de la Tesorería General de la República y oficinas de su dependencia;

i) La Ley N.º 12.444 de 4 de Marzo de 1957, la que en el ar-

tículo 2.º reemplaza el artículo 3.º del Decreto con Fuerza de Ley N.º 117 y dispone que: "la recaudación y percepción de los fondos provenientes de la ampliación del Decreto N.º 931, se hará directamente por el Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores o por intermedio de la Tesorería General de la República y Oficinas de su dependencia, y en el inciso 2.º de dicho artículo, otorga mérito ejecutivo a la nómina de los deudores morosos presentadas por las Tesorerías Comunales o Provinciales o por el Departamento de Indemnización antes mencionado, y en el inciso tercero del mismo artículo, faculta para hacer el cobro ejecutivo directamente a ese Departamento a través del Servicio de Cobranzas Judiciales de Impuestos, y en ambos casos, con arreglo a lo prevenido en la Ley N.º 10.225 y sus disposiciones complementarias o reglamentarias, y en el artículo transitorio de la misma ley se deja establecido que las obligaciones adeudadas con anterioridad a la vigencia de ella, deberán ser cumplidas mediante convenios de pago que se celebrarán entre los industriales afectados y el Departamento de Indemnización a los Obreros Molineros y Panificadores, dentro del término de sesenta días

contados desde la fecha de esta ley, agregando en el inciso segundo de ese artículo transitorio, que los convenios de pagos referidos en el inciso primero, no podrán exceder de cuatro años, y en el inciso tercero se dispone también, que si dichos convenios de pago no se celebran dentro del plazo de sesenta días contados desde la publicación de la ley, la nómina de deudores morosos tendrá fuerza ejecutiva;

4.º—Que como puede verse a través de los Decretos Supremos, Decretos con Fuerza de Ley y Leyes precedentemente mencionadas, existen normas legales que han dejado claramente establecido, sin que sea necesario referirse a la finalidad social que en ellos se persigue, que se ha concedido a los obreros molineros primero, y a los panificadores en seguida, la correspondiente indemnización por años de servicio en la industria respectiva, y que para el financiamiento del pago de ella se ha dispuesto que el Instituto de Economía Agrícola debe contemplar en los costos de molienda y de la elaboración del pan, un rubro que es del 8,33% de los jornales pagados por las industrias respectivas, y un rubro especial que debe acumularse y destinarse a la cancelación de

JUICIO EJECUTIVO

529

beneficios concedidos a tales obreros por años servidos con anterioridad al 1.º de Enero de 1947, y otro relativo a los gastos de administración de dichos fondos;

5.º—Que si bien los decretos primeramente mencionados tuvieron un alcance limitado, ya que se concedió tal indemnización a los obreros molineros primero, y en seguida a algunos obreros panificadores comprendiendo a los que trabajan en la industria del pan de las provincias de Santiago, O'Higgins, Colchagua y Ñuble, es lo cierto, que el Decreto Supremo N.º 756 de 13 de Octubre de 1952, hizo extensivo este beneficio a todos los obreros panificadores e impuso a todos los industriales del país, hubiesen o no solucionado sus conflictos mediante fallos arbitrales o actas de avenimiento, la obligación de ingresar mensualmente y dentro del mes, en la Tesorería correspondiente, el valor íntegro de los rubros antes mencionados y que correspondieran al mes anterior, de suerte que la obligación que pesa sobre los industriales en cuanto a depositar mensualmente y en la forma ordenada en el Decreto referido, los fondos por ellos recaudados y que se han obtenido mediante el recargo en los costos de la elaboración de la molienda del

trigo y del pan, y que soporta el público consumidor, es de toda evidencia. Los industriales que se limitan a percibir el mayor precio del pan y que son renuentes a cumplir con la obligación de depositar los fondos provenientes de los recargos citados, no cumplen con las obligaciones, que al efecto, les impuso a todos los industriales el mencionado Decreto Supremo;

6.º—Que el ejecutado, para sostener que a él no le afecta la obligación de efectuar tales depósitos no lo hace porque le niega existencia legal a los Decretos Supremos y demás que se han analizado, sino que, según expresa, porque él no se ha comprometido mediante un acta de avenimiento o de otra manera a efectuarlos, y porque, en su parecer, el Decreto antes mencionado habría impuesto a los industriales una contribución, lo que sólo puede hacerse por ley, de acuerdo con la Constitución Política del Estado;

7.º—Que como se ha visto en el considerando 5.º, para cumplir con la obligación de depositar en los rubros correspondientes al fondo de indemnización por años de servicios, ya sea en el Instituto de Economía Agrícola, prime-

ro, en el Servicio de Seguro Social y provisoriamente, después, y actualmente, en el Departamento de Indemnización a Obreros Molineros y Panificadores, no era necesario que el ejecutado se hubiese comprometido a ello mediante un acta de avenimiento o de otra manera, porque el tantas veces citado Decreto 756 dispuso terminantemente esa obligación para todos los industriales molineros y panificadores, sin excepción;

8.º—Que en lo relativo a la argumentación de que la obligación impuesta por el citado Decreto Supremo sería un impuesto, debe recordarse que los fondos que tienen los industriales panificadores que depositar, han sido obtenidos por ellos al cobrar el valor del pan, con su mayor precio, recargo que ha sido pagado por el público que consume dicho artículo, por lo que, ellos no han tenido que soportar ese recargo; y por lo demás, esa obligación no tiene el carácter de impuesto ni de contribución, porque el primero "es toda prestación de dinero que el Estado exige a los habitantes para financiar servicios indivisibles, o sea, los que benefician al conjunto de la población, de manera que no se puede individualizar el beneficiario", y con-

tribución "es el impuesto que pesa sobre la propiedad". Así, no puede ser considerado como impuesto o contribución, la obligación que pesa sobre los industriales mencionados en el Decreto Supremo N.º 756;

9.º—Que, respecto de los Decretos Supremos, debe tenerse en consideración que todos ellos emanan de autoridad competente; que han sido dictados dentro de la esfera de las atribuciones que les incumbe y para los fines que esas atribuciones han determinado, y en su dictación se han cumplido con todas las formalidades que tales actos precisan. En efecto, han sido dictados por el Presidente de la República, autoridad competente, llevan la firma del respectivo Ministro de Estado, tienen su número correspondiente, han sido refrendados por la Contraloría General de la República y registrados allí, después de tomar razón de ellos, y finalmente, se ha hecho la publicación de todos en el Diario Oficial, para que tengan el carácter de obligatorios, ya que de esa manera se los ha puesto en conocimiento de los interesados en forma legal;

10.º—Que la excepción de inexistencia de la obligación opuesta por el ejecutado basada en la

JUICIO EJECUTIVO

531

circunstancia de que ella no tendría fuente en que apoyarse, carece de fundamento por lo expuesto en los considerandos precedentes de este fallo, ya que ha quedado demostrado que la obligación que pesa sobre él, arranca de los Decretos antes referidos y cuya existencia legal no ha sido objetada por el demandado. De otro lado, conviene dejar sentado, que conforme a lo que dispone el artículo 1698 del Código Civil, "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o éstas", de donde se sigue, que el ejecutado está en la obligación de probar el fundamento de su excepción, sin que le sea plausible suponer que se trataría de probar un hecho negativo, porque ha podido probar si lo hubiese intentado, que él ha cumplido con su obligación, ya sea depositando tales fondos o habiendo siquiera hecho el pago por consignación como lo insinúa en el escrito de téngase presente de fojas 17 y lo expresó su defensor en estrados, o bien, que no existe a su respecto la obligación reclamada, porque se dedica a una actividad distinta a la que ejerce a quien no podría afectar tal obligación, y como nada ha acreditado para demostrar la inexistencia que alega, tal excepción debe ser desestimada;

11.º—Que tampoco puede prosperar la excepción deducida en el carácter de subsidiaria, esto es, al de prescripción, por cuanto no han transcurrido cinco años para que el título pierda su fuerza ejecutiva, pues aparece del expediente que la demanda fue notificada al ejecutado con fecha ocho de Agosto del año pasado, y la ley que dio mérito ejecutivo a la nómina de deudores morosos, es de cuatro de Marzo de mil novecientos cincuenta y siete;

12.º—Que los documentos acompañados por el actor de fojas 30 a 36, el primero, o sea, el de fojas 30 se refiere a la aprobación del precio del pan y de la harina hechas por el Instituto de Economía Agrícola y que debe regir desde el año mil novecientos cincuenta y uno; el de fojas 34 dice relación con la vigencia de los rubros de indemnización por años de servicios en la provincia de Concepción, y los de fojas 32 y 36 se refieren a laudos arbitrales expedidos por el Tribunal que presidió don Ruperto Puga, en los que no figura como parte el ejecutado. Ellos en nada alteran las conclusiones a que se llega en esta sentencia;

13.º—Que de acuerdo con la nómina acompañada a fojas 3, de

los industriales morosos del Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores, consta que el demandado adeuda a dicho fondo por el período comprendido entre el catorce de Diciembre de mil novecientos cincuenta y uno y el cuatro de Marzo de mil novecientos cincuenta y siete, la suma de quinientos sesenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos (\$ 567.972.—), y la ejecución seguida por el actor se funda en un título que lleva aparejada ejecución, siendo la deuda líquida, actualmente exigible y ella no se encuentra prescrita.

Por estas consideraciones y visto, además, lo que disponen los artículos 434 N.º 7.º, 441, 442 y 471 del Código de Procedimiento Civil, Decretos Supremos y Decretos con Fuerza de Ley antes citados, Ley N.º 10.225 de 20 de Diciembre de 1951 y Ley N.º 12.444 de 4 de Marzo de 1957, se revoca la sentencia apelada de diecisiete de Diciembre del año pasado, escrita a fojas 48, y se declara:

1.º) Que se desechan las excepciones de inexistencia de la obli-

gación y de prescripción, deducidas como principal y subsidiaria respectivamente, opuestas por el demandado; y

2.º) Que se hace lugar a la demanda de fojas 4, y en consecuencia, debe seguirse adelante la ejecución hasta hacer al ejecutante entero pago de su acreencia con los intereses respectivos, debiendo el ejecutado soportar las costas de la causa.

Anótese y devuélvase.

Agréguese el impuesto antes de notificar.

Redacción del Ministro señor Parra.

Publíquese.

Julio E. Salas Q. — Pedro Parra Nova — Héctor Roncagliolo Dosque.

Dictada por los señores Presidente de la Ilustrísima Corte, don Julio E. Salas Quezada y Ministros en propiedad, don Pedro Parra Nova y don Héctor Roncagliolo Dosque. — Abraham Solís Guíñez, Secretario.